

MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS, LA ELECCION DEL PROCEDIMIENTO, LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y OTROS ASPECTOS REFERIDOS AL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO: “SERVICIO MÓVIL DE ATENCIÓN SANITARIA A DROGODEPENDIENTES Y DERIVACIÓN A TRATAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID”.

NECESIDAD E INSUFICIENCIA DE MEDIOS

El contrato tiene como finalidad dar continuidad al de referencia C.A. 7/2018: “Servicio Móvil de Adicciones” (Referencia Nexus: A/SER-009618/2019). Este contrato finalizó el 15 de junio de 2025 sin posibilidad de prórroga, por lo que fue convocado el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato denominado “SERVICIO MÓVIL DE ATENCIÓN SANITARIA A DROGODEPENDIENTES Y DERIVACIÓN A TRATAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID”, de referencia PA SER 6/2025 (Nexus A/SER-014371/2025). Sin embargo, el expediente de este contrato, que hubiera dado continuidad al que ahora se convoca, mediante resolución, de 19 de junio de 2025, del Consejero Delegado de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, fue declarado desierto porque ningún licitador presentó oferta al procedimiento de licitación.

El objeto del contrato es la prestación de asistencia sanitaria, mediante dispositivos móviles en los espacios marginales de venta al menudeo, a personas adictas a sustancias para minimizar los efectos negativos relacionados con el consumo, así como el fomento de las derivaciones de esta población a los recursos de la Red Asistencial de Adicciones de la Comunidad de Madrid con el propósito de realizar un tratamiento de deshabituación

También formará parte del objeto del contrato el tratamiento a los pacientes con un trastorno persistente y en situación de alta marginalidad que residen en las 55 plazas de apoyo residencial a la adherencia al tratamiento de las que dispone la Consejería de Sanidad

La amplitud y las especiales características del objeto del contrato, reflejado todo ello en el pliego de prescripciones técnicas, impide que la prestación del servicio pueda ser ejecutada con personal propio. Por otro lado, tampoco se dispone de material y equipamiento suficiente para dar cobertura a los trabajos cuya contratación se pretende. En consecuencia, cabe concluir que el Servicio Madrileño de Salud no puede prestar con medios propios este servicio y debe recurrir a su contratación pública, conforme con las exigencias establecidos en los artículos 28.1 y 116.4 f) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

La interrupción de la prestación de este recurso tendría consecuencias muy negativas en el tratamiento de la población atendida, por lo que es necesario garantizar su continuidad ininterrumpida. Por tal motivo, en la actualidad, y hasta

la adjudicación de un nuevo contrato, la prestación del servicio se viene prestando por la UTE Centro Español de Solidaridad-Madrid Positivo, entidad adjudicataria del contrato de origen (C.A. 7/2018), con el compromiso de esta Dirección General de presentar a convalidación el gasto que se origine desde el día 16 de junio de 2025 y hasta que se adjudique el nuevo contrato que le dé continuidad.

ELECCION DEL PROCEDIMIENTO

Con objeto de garantizar la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, y una eficiente utilización de los fondos públicos, la licitación y adjudicación del contrato se realizará a través de un procedimiento abierto con pluralidad de criterios, que es el que la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 131.2, establece como procedimiento ordinario.

Por un lado, el procedimiento abierto es el que proporciona mayores niveles de publicidad y transparencia, que garantizan la no discriminación e igualdad de trato, y por otro, la utilización de una pluralidad de criterios permite adjudicar el contrato a la oferta que, cumpliendo con los requisitos técnicos mínimos exigidos en los pliegos, presente la mejor relación calidad-precio, lo que facilita seleccionar la oferta más ventajosa y, en consecuencia, garantizar una eficiente utilización de los fondos públicos.

JUSTIFICACION DE NO DISTRIBUIR EN LOTES EL CONTRATO

La atención sanitaria objeto del contrato, basada en el servicio móvil de atención a drogodependientes de la Comunidad de Madrid en espacios marginales, al que se da continuidad con el tratamiento en las plazas residenciales, constituye una unidad operativa y funcional de una actividad asistencial orientada a conseguir la estabilización del paciente. Su fraccionamiento en lotes impediría obtener la máxima eficiencia y eficacia, necesaria para la ejecución y continuidad del tratamiento.

JUSTIFICACION DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el art 202 es obligatorio establecer al menos una de las condiciones especiales de ejecución referidas a consideraciones económicas, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental, de tipo social o relativas al empleo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado Séptimo del Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno, los órganos de contratación deberán incluir, al menos, una condición especial de tipo social, medioambiental o relacionada con la innovación, siempre que esté vinculada al objeto del contrato, no sea discriminatoria y sea proporcionada y compatible con el derecho comunitario.

En cumplimiento de esta normativa, y en la medida en que el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales puedan verse afectados por la ejecución del contrato, los licitadores deberán presentar una declaración responsable donde

determinen claramente la línea de actuación dirigida a la implementación de estrategias de gestión medioambiental, tal y como queda detallado en el Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde indiquen detalladamente la gestión y tratamiento de los residuos vinculados con la prestación del servicio que se oferta y los planes dirigidos a la promoción del reciclado de dichos productos.

INFORME SOBRE EL CARÁCTER PLURIANUAL DEL CONTRATO

El contrato tiene como finalidad dar continuidad al de referencia C.A. 7/2018: "Servicio Móvil de Adicciones"

El objeto del contrato es la prestación de asistencia sanitaria, mediante dispositivos móviles en los espacios marginales de venta al menudeo, a personas adictas a sustancias para minimizar los efectos negativos relacionados con el consumo, así como el fomento de las derivaciones de esta población a los recursos de la Red Asistencial de Adicciones de la Comunidad de Madrid con el propósito de realizar un tratamiento de deshabituación

La interrupción de la prestación, o el cambio frecuente de contratista que no facilitara cierta estabilidad temporal en la prestación del recurso, tendría consecuencias muy negativas en el tratamiento de la población atendida, por lo que es necesario garantizar su continuidad ininterrumpida y máxima uniformidad en la prestación del servicio con objeto de conseguir la fidelización de los pacientes al recurso.

Por todo lo anterior, y conforme con el artículo 55 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, se propone un periodo de ejecución del contrato superior al ejercicio económico, con la siguiente distribución por anualidades:

ANUALIDADES	
2026	2.233.680,75 €
2027	744.560,25 €
TOTAL	2.978.241,00 €

JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA O PROFESIONAL

La solvencia económica y financiera requerida deberá resultar proporcional al objeto del contrato, no debiendo en ningún caso suponer un obstáculo a la participación de las pequeñas y medianas empresas o de las entidades sin ánimo de lucro que suelen participar en las licitaciones a este tipo de contratos. Por tal motivo, pero teniendo en consideración que con dicha solvencia se debe acreditar la capacidad de la entidad adjudicataria para hacer frente a las prestaciones objeto del contrato, se ha establecido como solvencia económica y financiera suficiente que el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres

últimos disponibles, deberá ser igual o superior al importe correspondiente al valor del presupuesto base de licitación del contrato.

La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. En el caso que nos ocupa, la solvencia técnica se asocia al presupuesto de ejecución del contrato y se vincula con el objeto del contrato, estableciéndose en el PCAP que se entenderá acreditada, de acuerdo con la actividad a desarrollar objeto del contrato, mediante la experiencia en la gestión y ejecución de servicios, públicos o privados, de tratamiento de adicciones, de apoyo al tratamiento de adicciones, y de actividades de reducción de daños (tales como prescripción y dispensación de clorhidrato de metadona, cribado de enfermedades infectocontagiosas,...) orientadas a minimizar los efectos de la drogodependencia, mejora de la salud de los consumidores y derivación a centros asistenciales de tratamiento de deshabituación de pacientes drogodependientes, por un importe igual o superior al 50% de la anualidad media del presupuesto del contrato.

En cuanto a los medios personales requeridos en el PPT, hay que tener en cuenta que el objeto del contrato consiste en la atención sanitaria de personas adictas a sustancias mediante dispositivos móviles para minimizar los efectos negativos relacionados con el consumo en los espacios marginales de venta al menudeo, mejorando la salud de esta población consumidora y contribuyendo a la salud pública, así como el fomento de las derivaciones de esta población a los recursos de la Red Asistencial de Adicciones de la Comunidad de Madrid con el propósito de realizar un tratamiento de deshabituación.

La drogodependencia es una enfermedad que muy frecuentemente se cronifica, convirtiéndose en una adicción de una gravedad tal que el abandono del consumo resulta extremadamente dificultoso. A ello contribuye que existe afectación y compromiso de la voluntad de las personas, las cuales no tienen muchas veces conciencia de enfermedad. Con frecuencia se ven afectadas diferentes áreas de la vida de las personas con problemas de adicción: salud, familia, relaciones sociales, trabajo, problemas legales.

Teniendo en cuenta el volumen y el perfil de las personas usuarias de este servicio, se establecen los puestos mínimos considerados necesarios para la ejecución del contrato que permitan garantizar los servicios reflejados en el punto 2 del PPT. En esta plantilla se establece la cobertura, de lunes a domingo, de puestos de medicina, psicología, enfermería, auxiliar de enfermería y trabajo social en horario de 9.00 a 16.00 horas los 365 días del año en los espacios de intervención.

Las funciones y responsabilidades de cada profesional vienen determinadas por la ley 44/2023, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo con su titulación y competencia específica, corresponda desarrollar a cada profesional.

Teniendo en cuenta lo anterior, que se trata de una atención multidisciplinar orientada a la asistencia y cuidados sanitarios y acompañamiento social, se

identifican las actuaciones más relevantes en cada una de las áreas de intervención:

Medicina: Realizar el diagnóstico, evaluación, tratamiento y seguimiento médico del paciente, prescripción y supervisión farmacológica.

Enfermería: Bajo la supervisión de un facultativo sanitario, prestar servicios de prevención, promoción y educación para la salud, atención sanitaria y dispensación farmacológica. Asimismo, actuaciones relacionadas con pruebas diagnósticas analíticas, cribados de enfermedades infectocontagiosas.

Social: Detectar, valorar e intervenir en aspectos sociales: educativos, de vivienda, judiciales, socio-laborales, así como en situaciones de riesgo, y promover la normalización social.

Psico-educativa: Desarrollar actuaciones de prevención, promoción de hábitos saludables, evaluación y rehabilitación psicosocial, fomentar la adquisición de habilidades para la vida diaria, formación en el ámbito ocupacional y prelaboral, aprovechamiento y planificación del ocio y tiempo libre.

En referencia a los medios materiales requeridos en el punto 5.2.1 y Anexo I del PPT, se señalan los vehículos que debe disponer la entidad adjudicataria durante la prestación del servicio, teniendo en cuenta que el objeto del contrato consiste en la atención sanitaria mediante dispositivos móviles a personas adictas a sustancias en los espacios de consumo.

Estos medios consisten en vehículos necesarios para la realización de las prestaciones descritas en el apartado 2, adaptándose a las características y necesidades de la población a la que se dirige.

El perfil de las personas usuarias del servicio se caracteriza por una alta exclusión social, larga evolución y elevado consumo de sustancias, alta prevalencia de enfermedades infectocontagiosas, presencia de pluripatologías, causas judiciales, ausencia de ingresos económicos y de redes de apoyo. Son personas sin conciencia de enfermedad, centradas en el consumo y que residen en entornos marginales.

Por tanto, los medios materiales mínimos requeridos para garantizar una adecuada prestación de servicios a esta población en las dos ubicaciones de intervención, son los siguientes:

- DOS vehículos adaptados para realizar atención socio-sanitaria y proporcionar el servicio de alimentación.
- DOS vehículos adaptados para atención sanitaria: dispensar metadona, consultas de medicina y enfermería.
- DOS vehículos para realizar acompañamiento a personas usuarias a servicios médicos, trámites administrativos y legales,

JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

Se considera que los criterios que sirven de base para la adjudicación del contrato cumplen los siguientes requisitos:

- a) Están vinculados al objeto del contrato.
- b) Han sido formulados de manera objetiva, con pleno respecto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad y no confieren al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada.
- c) Garantizan que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva, al acompañarse de especificaciones que permiten comprobar de manera fehaciente la información facilitada por los licitadores y así evaluar en qué medida las ofertas cumplen los criterios de adjudicación.

La ponderación escogida (49% oferta económica, 31% criterios cualitativos evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas y 20%) es conforme a lo establecido en el artículo 146 de la Ley 9/2017, en concreto: “cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, en su determinación, siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las formulas establecidas en los pliegos”.

Los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, no tienen atribuida una ponderación mayor a la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática (20% juicio de valor y 31% valoración automática por aplicación de fórmulas), por ello no procede para su valoración la designación del comité de expertos establecido en el art. 146.2.a) de la LCSP

Se considera que los criterios cualitativos que sirven de base para la adjudicación del contrato garantizan que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva, al acompañarse de declaraciones responsables de las entidades licitadoras y del extracto del proyecto técnico de gestión. Esto permite comprobar de manera fehaciente la información facilitada y así evaluar en qué medida las ofertas cumplen los criterios de adjudicación.

Entre los criterios cualitativos se han incluido criterios de adjudicación relativos a los recursos humanos que la entidad adjudicataria se compromete a adscribir a la ejecución del contrato, tanto en el número de profesionales destinados, como en su grado de especialización técnica y formación, criterios todos ellos vinculados al objeto del contrato y que incide en la calidad del servicio prestado.

El punto 4 del PPT establece la plantilla mínima con que se debe contar para prestar el servicio en las condiciones establecidas. Sin embargo, un incremento del número de profesionales destinados en el centro permitiría un reparto de la carga de trabajo que incidiría directamente en la calidad del servicio prestado, con

más tiempo disponible para el ejercicio la labor asistencial por parte de estos profesionales.

También se han incluidos criterios de adjudicación relativos a la docencia, formación e investigación del personal adscrito a la ejecución del contrato. Aspectos como la docencia en las rotaciones del personal en prácticas o la participación en cursos de un plan de formación continuada, inciden en el desarrollo de las carreras de los profesionales implicados, y contribuyen a su consolidación científica y técnica, lo que finalmente repercutirá en la calidad asistencial prestada a los pacientes, lo que está vinculado directamente con el objeto del contrato.

Por otro lado, es importante que la entidad disponga de un plan de formación continuada que ofrezca a los profesionales una formación que les permita la actualización en los diferentes ámbitos relacionados con su campo de intervención, formación que se dirige tanto a la mejora de competencias como al reciclaje de profesionales. El personal de estos CTA son personal externo al Sermas y no tienen opción a la formación continuada de la Comunidad de Madrid, por lo que se considera de gran interés que el equipo de profesionales pueda disponer de un plan de formación alternativo.

En cuanto al criterio que se ha de tomado en consideración para determinar cuándo nos encontramos ante una oferta incurso en presunción de anormalidad, se considerará que se encuentran incursas en presunción de anormalidad las ofertas que sean inferiores al presupuesto base de licitación en más de 20 unidades porcentuales. Sin embargo, dado que en los criterios de adjudicación de las ofertas se incluye la posibilidad de incorporar para la ejecución del contrato recursos humanos no contemplados en el PPT, y que suponen un incremento en los costes de la entidad adjudicataria para la ejecución del contrato, en las ofertas que obtengan una valoración entre 8 y 15 puntos en los criterios cualitativos evaluables por aplicación de fórmulas referidos a los recursos humanos, se considerará incurso en presunción de anormalidad cuando la oferta económica sea inferior a 15 unidades porcentuales. Si la valoración de estos criterios de adjudicación es superior a 15 puntos, se considerará incurso en presunción de anormalidad cuando la oferta económica sea inferior a 10 unidades porcentuales.

No se han tenido en cuenta los criterios cuya cuantificación dependen de un juicio de valor para determinar cuándo nos encontramos ante una oferta incurso en presunción de anormalidad porque estos no suponen un incremento significativo en los costes de la entidad adjudicataria para la ejecución del contrato.

JUSTIFICACIÓN DE EXIGENCIA DE UNA GARANTÍA COMPLEMENTARIA

El art. 107 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece que, en casos especiales, el órgano de contratación puede exigir en el pliego de cláusula administrativas particulares que, además de la garantía definitiva, el licitador que vaya a ser propuesto como adjudicatario preste una garantía complementaria de hasta un 5 por ciento del precio que haya ofertado, IVA excluido. En este mismo

artículo la ley considera que, a estos efectos, constituye un caso especial aquel en el que la oferta presentada por el adjudicatario resultara inicialmente incurso en presunción de anormalidad.

La prestación del servicio consistente en la atención sanitaria de personas adictas a sustancias mediante dispositivos móviles es un instrumento esencial para minimizar los efectos negativos relacionados con el consumo y para el fomento de las derivaciones de esta población a los recursos de la red asistencial con el propósito de realizar un tratamiento de deshabituación. La interrupción de este servicio podría tener consecuencias muy negativas para los usuarios de este recurso dada la importancia de la atención que se les presta. En este sentido se deben tomar todas las medidas que puedan garantizar su continuidad y buena ejecución, y entre ellas, el art. 107 de la LCSP nos permite establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares del expediente de contratación que el licitador que vaya a ser propuesto como adjudicatario preste una garantía complementaria del 5 por ciento del precio de su oferta, IVA excluido, si su oferta resulta inicialmente incurso en presunción de anormalidad, lo que se considera indicado en este caso.

JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Durante la ejecución del contrato, no garantizar de forma expresa la reparación de los daños que puedan sufrir las personas o las cosas, de modo muy especial las que constituyan el objeto mismo de la prestación, puede tener consecuencias negativas en la continuidad y seguridad de la asistencia a los pacientes, y por este motivo se entiende que está suficientemente justificada la necesidad de que el adjudicatario del contrato cuente con un seguro para cubrir la responsabilidad civil sobre los daños causados durante la prestación del servicio en las personas o en los bienes muebles e inmuebles objeto de la actividad contratada.

Las coberturas del seguro de responsabilidad civil que se pretende contratar, y sus límites económicos por siniestro, son los que se exige a los contratos actualmente en vigor, y a los que los nuevos contratos deben dar continuidad. En este sentido se han demostrado que ni son desproporcionados ni limitan la concurrencia de licitadores, ya que han podido ser asumidos por las entidades adjudicatarias. Por otro lado, para determinar el presupuesto base de licitación del nuevo contrato, como se describe en la memoria económica del expediente, se han tenido en cuenta los costes de carácter general que para la ejecución del contrato soportan estas entidades, costes entre los que se encuentra el del seguro de responsabilidad civil requerido.

JUSTIFICACIÓN DEL REGIMEN DE INFRACCIONES Y PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA DEL CONTRATO

En el PCAP se recogen expresamente las penalidades por ejecución defectuosa del contrato de acuerdo con el régimen de infracciones y penalidades que se describe.

Las infracciones que se establecen están relacionadas con incumplimientos de las obligaciones establecidas expresamente en los pliegos del contrato; tanto de obligaciones referidas a las condiciones en que los servicios deben ser prestados para la ejecución del contrato, como de los requisitos de capacitación exigidos al personal que deben realizarlos, o como al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la entidad adjudicataria en sus ofertas que han sido valorados por la Administración como criterios de adjudicación del contrato. A título de ejemplo pueden mencionarse la manifiesta incapacidad profesional, no acatar las instrucciones dictadas por la dirección del centro, etc.

Existe una relación evidente entre la buena ejecución del servicio y el adecuado tratamiento y diagnósticos de los pacientes de los Centros de Tratamiento de Adicciones, que es el fin último perseguido por el contrato, por lo que un incumplimiento de las obligaciones contractuales que redunde en la calidad de las prestaciones del servicio debe ser objeto del régimen de penalidades propuesto, cuya cuantía se ha establecido de manera proporcional en relación con la gravedad de la infracción.

LA DIRECTORA GENERAL ASISTENCIAL DEL SERMAS

Firmado digitalmente por: ALMUDENA QUINTANA MORGADO

Fecha: 2025.11.12 08:40

Fdo.: Almudena Quintana Morgado